

Santiago, veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos tercero y cuarto, que se eliminan.

Y teniendo, además, presente:

1º) Que, en cuanto a una eventual inhabilidad de la Sra. Juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, útil resulta recordar que la independencia e imparcialidad de los jueces es una garantía fundamental de todas las personas que recurren a los tribunales de justicia, que constituye una reafirmación de la igualdad ante la ley y de la protección que se le debe en el ejercicio de sus derechos y ante la justicia, aspectos que nuestro ordenamiento constitucional reconoce en diversas disposiciones, en especial en los artículos 5 , 19 N°2, 3, 7, 26 y 76 de la Carta Fundamental.

2º) Sobre la materia, los tribunales nacionales e internacionales han determinado que toda persona, dentro de un debido proceso, corresponde sea juzgada por un tribunal integrado por jueces objetivamente independientes y subjetivamente imparciales, aspecto, este último, que se ha destacado tiene dos vertientes: a).- Concreta, referida a los jueces y a la ausencia de cualquier relación con las partes que afecten su desempeño, la que debe ser verificada mediante la prueba correspondientes; y b).- Abstracta, en que se excluye todo posible cuestionamiento de parcialidad, en donde aspectos objetivos, constituyen antecedentes suficientes que podrían llegar a establecer cualquier legítima duda y, por lo mismo, razonablemente llevan a hacer perder la confianza en el desempeño ecuánime y neutral del juzgador. Por consiguiente, cualquier juez de quien se pueda temer, por una fundada causa legal, su falta de imparcialidad debe ser aceptada su recusación (SCS Rol N° 99503-20).



3°) Que, en tal sentido nuestro ordenamiento jurídico, aspira y persigue el respeto y la observancia de la garantía constitucional que propugna que todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por un tribunal imparcial, sin perjuicio que -tal como aconteció en la especie- cuando se intenta inhabilitar a un magistrado mediante la invocación de una causal abstracta, como fue, el haber emitido un pronunciamiento previo, se debe tener presente la naturaleza de la resolución y el estándar de fundamentación que se exige la ley para ella.

4°) Que, del mérito de lo expuesto, es posible colegir que la juez cuya inhabilitación se solicita, pronunció una resolución en una audiencia preparatoria del Juzgado de Familia de Punta Arenas, que daba cuenta de hechos similares a los conocidos en la causa RIT 45-2025 del Tribunal de Juicio Oral de esa ciudad, y que se refería a los mismos intervinientes, en la que remitió los antecedentes al Ministerio Público por estimar que podían constituir un delito y en la misma resolución mantuvo las medidas cautelares decretadas respecto del amparado, encontrándose esos hechos íntimamente ligados con aquellos que motivaron la acusación efectuada por la Fiscalía en contra del amparado, por lo que puede estimarse que ya había emitido pronunciamiento al considerar que podrían constituir un delito y, especialmente, informó las medidas cautelares que pesaban sobre el imputado;

5°) Que, conforme a lo que se viene razonando, llevan a concluir que la intervención previa que le cupo a la juez señora Marcela Vergara Rubilar, posee la capacidad de poner en duda su imparcialidad objetiva, pues la semejanza y vínculo que existe entre los hechos que se conocieron en el Juzgado de Familia y en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal son factores que razonablemente han podido suscitar desconfianzas, no sólo al imputado, sino que a la ciudadanía en general, respecto a su imparcialidad;



6º) Que, en las condiciones expuestas, los magistrados recurridos de la sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal incurrieron en una ilegalidad al no acoger la causal de inhabilidad invocada por la defensa del imputado, vulnerado su garantía fundamental a ser juzgado por un tribunal imparcial, por lo que deberá acogerse la acción constitucional impetrada.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo prevenido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de seis de junio de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el Ingreso Corte N° 64-2025 y, en su lugar, se declara que **se acoge** el recurso de amparo interpuesto a favor de Marcos Aguilar Trafian, declarándose que la juez señora Marcela Vergara Rubilar le afecta la causal de inhabilidad del artículo 195 N°8 del Código Orgánico de Tribunales, en la causa 45-2025, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, por lo que deberá abstenerse de intervenir en ella.

Comuníquese, regístrese y devuélvase.

Rol N° 22.153-2025



BTXFXYCFPXZ



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., María Teresa De Jesús Letelier R., Maria Gajardo H. y los Abogados (as) Integrantes Raul Fuentes M., Carlos Antonio Urquieta S. Santiago, veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintiséis de junio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

